

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: LA CONTEXTUALIZACIÓN COMO MÁXIMA TUTELAR

José Castillo Ruiz
Profesor Titular
de Historia del Arte.
Universidad de Granada

Cuando se analizan la consideración y el tratamiento que la normativa internacional otorga -en su desarrollo histórico- al patrimonio inmueble, se enuncian de manera recurrente dos claves identificadoras de dicha consideración:

La constante ampliación o extensión del tipo de bienes inmuebles susceptibles de protección, señalándose -en este sentido- una evolución desde el concepto de ambiente contenido en la Carta de Atenas (Sociedad de Naciones, 1931) hasta la noción de ciudad histórica instituida en la Carta de Washington (ICOMOS, 1987);

El paulatino perfeccionamiento de los instrumentos de intervención. En este caso, se observa un avance desde el reglamentismo arquitectónico derivado de la Carta de Atenas de 1931 y escasamente modificado por la Carta de Venecia (II Congreso Internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos, 1964), a la ordenación integral e integrada del mismo en sus múltiples dimensiones -arquitectónica, urbana, funcional, económica, social, etc.- mediante la utilización de los instrumentos de planificación urbana y territorial, instituida, fundamentalmente, en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (Consejo de Europa, 1975) a través del concepto de “conservación integrada”.

Aunque estas dos claves, por otro lado bastante conocidas, siguen siendo válidas en el presente como identificación sumaria de la evolución del patrimonio inmueble a través de la normativa internacional, consideramos que existen otros contenidos o principios que permiten precisar y redimensionar dichas claves, sobre todo, si observamos la normativa internacional dentro del complejo y diverso proceso histórico de fundamentación teórica y metodológica de la Protección como ámbito científico.

Desde este punto de vista, y analizando las diferentes normas promulgadas por los organismos supranacionales con competencias en la materia desde una perspectiva global y unitaria, podemos afirmar que las diferentes propuestas contenidas en dichas normas con la finalidad de caracterizar o determinar la acción en los bienes inmuebles derivan, fluctúan o convergen en torno a una idea matriz esencial: la contextualización de los vestigios históricos o, de forma aún más extensiva, la antropologización del pasado. De esta forma, la objetiva evolución y modificación -tanto de los inmuebles objeto de protección como de los instrumentos de actuación- que se manifiesta en la normativa internacional no debe observarse sólo como una extensión cualitativa, dimensional y funcional (según la identificación que se hace de esta ampliación dentro de la Teoría de los Bienes Culturales surgida en torno a la Comisión Franceschini en la década de los sesenta) del patrimonio inmueble sino, sobre todo, como una precisión, ampliación y redefinición del mismo como contexto humano.

Para entender la idea aquí defendida de que ya la Carta de Atenas de 1931 asume la contextualización de los vestigios históricos como premisa básica- produciéndose a partir de aquí la evolución de la misma en los términos referidos- debemos apuntar que cuando se promulga dicho documento, la Protección del Patrimonio Histórico ya había superado su condición de aproximación empirista, improvisada y fragmentaria a la realidad cultural mantenida durante el siglo XIX, asumiendo, en cambio, los principios y fundamentos de la nueva disciplina de la Protección formalmente codificados a través de la brillante elaboración de Aloïs Riegl (su obra *“Proyecto para una organización legislativa de la conservación en Austria”* de 1903 es, para muchos, el año del nacimiento de la Protección como autónoma disciplina), el cual sistematiza patrimonialmente las trascendentes aportaciones de autores como John Ruskin, William Morris o Camillo Sitte.

La gran contribución de Aloïs Riegl, formalizada a través del valor de antigüedad, fue el establecimiento de la dimensión inmaterial o subjetiva de los valores patrimoniales (a partir de aquí, éstos no se fundarán en el objeto que lo acoge o materializa sino en el sujeto que lo aprehende y experimenta), de la cual se derivan o deducen gran parte de los presupuestos tutelares actuales, tales como la instauración del interés público como legitimador de la protección, el carácter democrático o universal de los valores patrimoniales, etc.

La traslación de los valores patrimoniales del objeto al sujeto significa que a partir de entonces, y situándonos en el campo concreto del patrimonio



inmueble, un monumento no debe entenderse como una singularidad material o estilística, sino como la manifestación física de una serie de contenidos sociales, espirituales, productivos, etc., en definitiva, como manifestación de una determinada cultura o civilización. Es entonces el hombre -considerado tanto individualmente como colectivamente- el que se convierte en el epicentro de las políticas de protección.

Entendiendo entonces, la evolución y modificación del patrimonio inmueble y sus mecanismos de protección como la precisión, ampliación y redefinición de su dimensión como contexto humano, las dos claves señaladas al principio, identificadoras de esa evolución en la normativa internacional acaban redimensionándose en estas otras dos:

La consecución de la máxima potencialidad presente en la identificación del patrimonio inmueble como contexto humano;

La superación de la fractura entre pasado y presente subyacente en la consideración contextual del patrimonio inmueble.

La consecución de la máxima potencialidad presente en la identificación del patrimonio inmueble como contexto humano

La consideración del patrimonio inmueble como el contexto físico de una determinada cultura o civilización encierra en sí misma una enorme potencialidad con relación a la identificación de vestigios materiales o inmateriales, susceptibles de protección en cuanto definidores o conformadores de dicho contexto. El desarrollo de esta potencialidad es lo que irá marcando la historia de la protección a través de los documentos internacionales, tal y como se manifiesta en la sucesiva ampliación del



tipo de bienes que se van incorporando dentro del patrimonio inmueble. Éstos serían los principales hitos en esta continuada ampliación:

La inclusión de los inmuebles circundantes a los monumentos a través del concepto de ambiente (Carta de Atenas de 1931);

La inclusión de lugares y paisajes -naturales, rurales o urbanos- de interés cultural o estético (Recomendación relativa a la protección de la belleza y carácter de los lugares y paisajes. UNESCO, 1962). Se inicia así la inclusión de bienes naturales dentro del Patrimonio Histórico, lo cual viene a ratificar la fundamentación antrópica de los valores patrimoniales antes señalada;

La incorporación de sitios y conjuntos histórico-artísticos (Informe sobre la defensa y puesta en valor de los sitios y conjuntos histórico-artísticos. Informe Weiss. Consejo de Europa, 1963) derivado, especialmente, del reconocimiento cultural del considerado como “patrimonio arquitectónico menor”, que es donde incide la conocida Carta de Venecia de 1964, aunque ya había sido implícitamente anticipado por la Carta de Atenas de 1931;

Patrimonio cultural inmobiliario: se trata de un concepto contenido en la Resolución relativa a la adaptación de los sistemas legislativos y reglamentarios y a los requisitos de la conservación integrada del patrimonio arquitectónico (Consejo de Europa, 1976), el cual constituye un importante ejercicio de unificación -no sólo conceptualmente sino jurídica y procedimentalmente- de la realidad patrimonial ya identificada anteriormente y que aquí se concreta en

patrimonio arquitectónico -monumentos y conjuntos arquitectónicos- y sitios. Este concepto será precisado y modificado a través de otros documentos como la II Conferencia Europea de Ministros responsables del patrimonio arquitectónico (Consejo de Europa, 1985), donde se expresa la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio arquitectónico incluyendo también el vernáculo, el rural, el técnico-industrial y el de los siglos XIX y XX;

La instauración del concepto de ciudad histórica: (Carta de Washington. ICOMOS, 1987). Con este concepto, la fragmentaria y jerárquica noción de centro histórico (presente en documentos como las Cartas de Venecia de 1964, Nairobi -UNESCO, 1976- o Quito -UNESCO, PNUD, 1977-) queda cancelada al diluirse en la globalidad del organismo urbano y territorial en el que se inserta, el cual queda signado con la valoración cultural de aquél, convirtiéndose, por tanto, en el ámbito objeto de ordenación;

Identificación de patrimonios específicos, en parte ya incluidos en denominaciones más extensivas y genéricas ya comentadas, pero que han sido objeto de precisión en cuanto a sus contenidos y criterios de intervención: jardines históricos (Carta de Florencia. ICOMOS, IFLA, 1982), arquitectura del siglo XX (Recomendación relativa a la protección del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Consejo de Europa, 1991), bienes muebles incluidos en los bienes inmuebles (Recomendación relativa a las medidas para promover la conservación integrada de los conjuntos históricos compuestos de inmuebles y de bienes muebles. Consejo de Europa, 1998), arquitectura vernácula, tradicional y rural (Carta de Cuba. 1998; Carta del patrimonio vernáculo. ICOMOS, 1999; Recomendación relativa a la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. UNESCO, 1989), etc.;

La asunción de los conceptos de paisaje y territorio: con la instauración de estas formas de identificación del patrimonio inmueble (la Convención Europea del Paisaje de 2000 se podría considerar como el máximo exponente en la normativa internacional) podría afirmarse que la potencialidad presente en la consideración contextual de los bienes inmuebles alcanza su máximo desarrollo, ya que los diferentes ámbitos o bienes hasta ahora reconocidos se diluyen en la globalidad del territorio en el que el grupo humano se identifica y desarrolla como colectivo social.

La trascendencia o efectos de este sustancial cambio en la caracterización del patrimonio inmueble y sus políticas de protección van a ser de gran calado, por lo que conviene detenernos en sus razones propiciatorias, las cuales nos llevan a la otra clave identificada: la superación de la distinción entre pasado y presente.

Cuando Aloïs Riegl -y antes John Ruskin- establecieron la subordinación de los monumentos al sujeto y su vinculación o derivación del contexto cultural, establecieron como máxima tutelar la distinción radical entre el pasado (que era el ámbito o contexto histórico a proteger en cuanto portador de significados y valores) y el presente (su carencia de valores exigía no tanto negarlo como aislarlo y desvincularlo del pasado), lo cual, entre otras razones, garantizaba su desarrollo libre y autónomo.

Si bien esta incomunicación entre pasado y presente ha tenido importantes efectos positivos (la fundamentación de principios y métodos proteccionistas actualmente incontestables como la defensa de la prevención, mantenimiento o conservación como criterios de intervención o la imposibilidad de trasladar un monumento del lugar en el que fue construido se asientan en este presupuesto), subyacía en ella un condicionante muy restrictivo, especialmente en el ámbito contextual que abordamos: la exclusión de la dimensión vital de dicho contexto. Esto significaba que el contexto humano, considerado a través de la formalización del patrimonio inmueble se reducía exclusivamente al de las culturas o periodos históricos que lo crearon o vivieron en el pasado, con lo cual se excluía la dimensión funcional presente y futura.

La superación, por tanto, de esta fractura o separación entre pasado y presente constituirá uno de los hitos más relevantes de la historia de la protección, incidiendo de una manera muy relevante tanto en la caracterización del Patrimonio Histórico ,como en la determinación de los instrumentos para su protección.

Se puede considerar, de manera general, que la superación de esta distinción se produce de forma explícita a través del concepto de conservación integrada, por lo tanto, a partir de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975. Cuando en este documento, o en otros del mismo Consejo de Europa que lo completan o desarrollan -como la Declaración de Amsterdam de 1975 o la Resolución 28 de 1976 ya citada- se exponen contenidos como “*el patrimonio arquitectónico es*

La superación de la fractura entre pasado y presente subyacente en la consideración contextual del patrimonio inmueble

un capital de valor espiritual, cultural, social y económico”, o la conservación integrada se entiende como “... *el conjunto de medidas que tienen por finalidad garantizar la perpetuación de dicho patrimonio, su mantenimiento en el marco de un entorno apropiado, ya sea creado por el hombre o la naturaleza, así como su utilización y adaptación a las necesidades de la sociedad...*”, lo que se está instituyendo es que el patrimonio inmueble no es sino una parte fundamental y muy significada del contexto vital, en este caso instalado en la continuidad histórica de numerosos contextos vitales donde el hombre actual se desarrolla, de ahí la necesidad inevitable de que la ordenación de dicho contexto (la protección del patrimonio inmueble) se integre dentro de la “... *planificación urbana y regional*”, en definitiva, dentro del conjunto de políticas establecidas por los gobiernos para la ordenación y regulación de su territorio, es decir, de su población.

Este trascendente acontecimiento, que por otro lado tenía antecedentes muy importantes -sobre todo en el Informe Weiss de 1963 donde de forma expresa se reflexiona en torno a la necesidad de superar esa confrontación que, en cuanto a la normativa internacional, estaba identificada por la Carta de Atenas de 1931 (con su evidente desconfianza en la arquitectura contemporánea) y por la Carta de Atenas del Urbanismo de 1933 (con su manifiesta desconsideración hacia el potencial significativo y, también, funcional de las ciudades históricas)-, va a producir a partir de estos momentos dos efectos, por otro lado interrelacionados, de gran significación futura:

La progresiva sustitución, tal y como ya anticipábamos, del concepto de patrimonio inmueble por el de paisaje o territorio; consecuencia lógica de considerar el patrimonio arquitectónico como el contexto vital del hombre, así como de la necesidad de integrarlo en el resto del marco urbano o territorial en el que se inserta; marco urbano y territorial éste que, a través de estos conceptos de paisaje o territorio, acaba por convertirse en el objeto de protección u ordenación propiamente dicho. Para ello será necesario elaborar nuevos valores -siempre respetando el ineludible carácter antrópico del Patrimonio- que justifiquen su existencia como unidad patrimonial: el valor de identidad -especialmente reclamado en todos aquellos documentos que abordan la protección del paisaje o del patrimonio vernáculo o tradicional- y el asociado de la relatividad cultural (La Carta de Nara sobre la noción de autenticidad en la conservación del patrimonio cultural promulgada por ICOMOS y UNESCO en 1994 es muy representativa de este concepto) serán los que se instituyan.

Resulta interesante señalar cómo con la instauración de estos conceptos integradores de paisaje y territorio se produce, después de numerosos intentos (la Convención sobre la protección del patrimonio mundial y cultural aprobada por la UNESCO en 1972 constituye un hito poco resaltado desde esta perspectiva, dada la sonoridad producida por la creación de la selectiva Lista del Patrimonio Mundial), la definitiva fusión entre espacios culturales y naturales, hecho éste que significa subordinar el valor propiamente físico o natural de estos últimos a la dimensión antrópica constitutiva del propio concepto de Patrimonio (la denostada interrelación arte-naturaleza propugnada por John Ruskin a mediados del siglo XIX acaba convirtiéndose, desde estos nuevos parámetros, en moderna filosofía tutelar);

El paulatino fortalecimiento del aprovechamiento productivo como finalidad tutelar. La consolidación del contexto vital, del territorio, como el ámbito de ordenación impulsa necesariamente a considerar no sólo la dimensión social o cultural del patrimonio inmueble, sino también la económica.

Aunque esta dimensión economicista ya estaba presente en numerosos documentos internacionales desde el pionero Informe Weiss de 1963 (es en aquellos elaborados sobre el turismo, desde la Carta del turismo cultural -ICOMOS, 1976-, donde de manera más evidente se hace referencia a esta dimensión), es el documento promulgado por la IV Conferencia Europea de Ministros responsables del patrimonio cultural celebrada en Helsinki (Consejo de Europa, 1996), el que puede considerarse como la propuesta más paradigmática en este sentido, instituyéndose a partir de aquí, de una forma categórica, la consideración del *“patrimonio cultural como un factor de desarrollo sostenible”*, es decir, como un recurso útil y provechoso. Como puede verse, es el concepto de desarrollo sostenible, instituido internacionalmente en la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo (ONU, 1992), el argumento utilizado para contrarrestar y superar las tradicionales reticencias existentes con relación a la inclusión de los bienes de la cultura dentro de los mecanismos económicos del mercado. En todo caso, nos parece muy relevante señalar que dicho concepto -según la caracterización que de él se hace en la Declaración de Río- se asienta en un presupuesto que resume y justifica la exposición argumental aquí realizada: *“los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible”*.